

NAACIONES UNIDAS  
CONSEJO  
ECONOMICO  
Y SOCIAL



Distr.  
GENERAL

E/CN.4/979/Add.2  
21 de enero de 1969

ESPAÑOL  
Original: INGLES

COMISION DE DERECHOS HUMANOS  
25º período de sesiones

ESTUDIO DEL APARTHEID Y DE LA DISCRIMINACION RACIAL  
EN EL AFRICA MERIDIONAL

Informe del Relator Especial

Adición

PARTE II

Capítulo VII

EXAMEN DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR LAS NACIONES UNIDAS  
EN RELACION CON LOS TERRITORIOS AFRICANOS BAJO  
ADMINISTRACION PORTUGUESA

El Secretario General ha recibido el informe adjunto preparado, de conformidad con la resolución 3 E (XXIV) de la Comisión de Derechos Humanos, por el Sr. Manouchehr Ganji (Irán), Relator Especial de la Comisión, y tiene el honor de ponerlo en conocimiento de ésta.

Las opiniones expresadas en este informe son las del autor.

## Capítulo VII

### EXAMEN DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR LAS NACIONES UNIDAS EN RELACION CON LOS TERRITORIOS AFRICANOS BAJO ADMINISTRACION PORTUGUESA 188/

#### SECCION A

#### BREVE RESEÑA DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR LAS NACIONES UNIDAS EN 1960-1966

##### 1. Introducción

302. Las Naciones Unidas han tratado la cuestión de los territorios bajo dominación portuguesa como un problema colonial que constituye una grave amenaza para la paz y la seguridad internacionales. Desde 1962, esa cuestión ha sido objeto de constantes debates en las reuniones del Comité de los Veinticuatro, en el período comprendido entre 1961 y 1967, se ha examinado en diversas reuniones del Consejo de Seguridad, y lo mismo se ha hecho en cada período de sesiones de la Asamblea General desde 1960 y en los últimos períodos de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos.

303. Desde que Portugal llegó a ser Miembro de las Naciones Unidas, en 1955, ha sostenido invariablemente que ciertos territorios bajo su administración eran "provincias de ultramar" del Estado metropolitano. Portugal se opuso a la inclusión de un tema sobre los territorios en el programa de todo órgano de las Naciones Unidas y sostuvo que la decisión de aplicar a Portugal el Capítulo XI de las Carta de las Naciones Unidas, relativo a los territorios no autónomos, no era legal y violaba el principio enunciado en el párrafo 7 del Artículo 2, por el que se negaba expresamente a las Naciones Unidas el derecho de intervenir en los asuntos que eran esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados.

304. Al examinar la situación de los territorios bajo administración portuguesa, las Naciones Unidas han formulado los siguientes objetivos fundamentales: que se aplique la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, en la que figuraba la Declaración

---

188/ En el primer informe del Relator Especial no se planteaba la cuestión de los territorios bajo dominación portuguesa. Por consiguiente, el presente estudio de las medidas adoptadas por las Naciones Unidas se remonta hasta el período en que dicha cuestión se examinó por primera vez.

sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, que Portugal reconozca el derecho de los pueblos autóctonos a la libre determinación, la libertad y la independencia, que se proteja a la población contra la política de represión y contra la violación sistemática de los derechos humanos por las autoridades portuguesas, y que se vele por la paz y la seguridad internacionales amenazadas por los actos del Gobierno portugués.

## 2. La cuestión de Angola

305. De 1960 a 1962, la Asamblea General y el Consejo de Seguridad trataron la situación de Angola como un tema independiente.

306. El 10 de marzo de 1961, el Consejo de Seguridad incluyó el tema en su programa a instancias del representante de Liberia, quien manifestó que los acontecimientos ocurridos en dicho territorio exigían que el Consejo adoptara inmediatamente las medidas necesarias para impedir nuevas violaciones de los derechos humanos. No se aprobó un proyecto de resolución, presentado por los miembros afroasiáticos del Comité, según el cual el Consejo exhortaría, entre otras cosas, al Gobierno de Portugal a adoptar medidas e introducir reformas en Angola destinadas a aplicar la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General y nombraría una subcomisión encargada de realizar una investigación.

307. El 23 de marzo de 1961, en la segunda parte de su decimoquinto período de sesiones, la Asamblea General decidió, a propuesta de 40 Estados Miembros, incluir la cuestión de Angola en su programa y por 73 votos contra 2 y 9 abstenciones aprobó la resolución 1603 (XV), que contenía las disposiciones aprobadas anteriormente por el Consejo de Seguridad.

308. El Consejo de Seguridad reanudó posteriormente el examen del problema, y el 9 de junio de 1961 aprobó por 9 votos contra ninguno y 2 abstenciones la resolución 163 (1961), que reafirmaba la resolución 1603 (XV) de la Asamblea General, instaba a Portugal a que desistiera inmediatamente de las medidas represivas y expresaba la esperanza de que se encontrase al problema una solución pacífica de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas.

309. En su informe, la Subcomisión, creada en virtud de la resolución 1603 (XV) de la Asamblea General, expresó su pesar ante la actitud negativa adoptada por Portugal y manifestó que la política de asimilación propugnada por el Gobierno de Portugal

no se había visto acompañada de ninguna preparación activa de la población autóctona para que ésta alcanzara la condición de ciudadanía. Basándose en dicho informe, la Asamblea General aprobó la resolución 1742 (XVI), por la que, entre otras cosas, reafirmó el derecho del pueblo angolano a la libre determinación y a la independencia, reprobó las medidas de represión y la acción armada contra el pueblo de Angola e hizo un llamamiento al Gobierno de Portugal para que pusiera en libertad inmediatamente a los presos políticos angolanos. La Asamblea General decidió prorrogar el mandato de la Subcomisión y pidió nuevamente a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas o miembros de los organismos especializados que negasen a Portugal todo apoyo y ayuda que éste pudiera utilizar para llevar a cabo la represión contra el pueblo de Angola. En el decimoséptimo período de sesiones, la Asamblea General, en su resolución 1819 (XVII), reafirmó su resolución 1742 (XVI), por cuanto el Gobierno de Portugal seguía recurriendo a la acción armada y otras medidas de represión contra el pueblo de Angola. Además, pidió al Consejo de Seguridad que adoptase las medidas apropiadas, incluso sanciones, para que Portugal acatase las resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad.

3. Examen por los órganos de las Naciones Unidas de la situación en los territorios bajo dominación portuguesa: 1960-1966

a) Medidas adoptadas por la Asamblea General y sus órganos auxiliares

310. La Asamblea General examinó por primera vez una cuestión relativa a los territorios bajo administración portuguesa, considerados conjuntamente, en su decimoquinto período de sesiones, con motivo de las cuestiones relativas a la transmisión y el examen de información sobre los territorios no autónomos y de la aplicación de la "Declaración" adoptada por la Asamblea General en su resolución 1514 (XV).

311. Desde que Portugal llegó a ser Miembro de las Naciones Unidas, en 1955, sostuvo invariablemente que ciertos territorios bajo su administración eran "provincias de ultramar" y, en consecuencia, no estaban sujetos a las disposiciones del Capítulo XI de la Carta relativas a territorios no autónomos. En virtud de la resolución 1542 (XV), aprobada en su decimoquinto período de sesiones, a pesar de las objeciones del Gobierno de Portugal, la Asamblea General enumeró los territorios bajo administración de Portugal que consideraba como territorios no autónomos; declaró que Portugal tenía obligación, conforme al Artículo 73 de la Carta, de transmitir, respecto de

esos territorios, la información pertinente, y pidió al Gobierno de Portugal que obrara en consecuencia. Como Portugal se negó a acatar esa resolución, la Asamblea General, en su resolución 1699 (XVI) aprobada en el decimosexto período de sesiones, condenó la actitud negativa de Portugal y creó un Comité Especial de siete miembros para que examinara con urgencia, en el contexto del Capítulo XI de la Carta y de las resoluciones pertinentes de la Asamblea, la información de que se dispusiera acerca de los territorios administrados por Portugal, y sometiese sus observaciones, conclusiones y recomendaciones a la consideración de la Asamblea y de cualquier otro órgano que ésta pudiese designar para ayudarle a poner en práctica la resolución 1514 (XV). También pidió a los Estados Miembros que hicieran uso de su influencia para conseguir que Portugal cumpliera con las obligaciones que le imponen la Carta y las resoluciones pertinentes de la Asamblea General, y que negasen a Portugal cualquier ayuda o apoyo que este país pudiera utilizar para la represión de los pueblos de los territorios no autónomos que administra.

312. El Comité Especial para los Territorios bajo Administración Portuguesa informó que la relación esencialmente colonial entre Portugal y los territorios negaba a la población autóctona la oportunidad de emprender su propio desarrollo. Además, en dichos territorios esta población no tenía los mismos derechos civiles y políticos que los nacionales de Portugal. El Comité también señaló que el equipo militar y de otra índole, suministrado en especial por los miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, seguía utilizándose contra la población autóctona. Por consiguiente, la Asamblea General debería adoptar medidas encaminadas a imponer un embargo total sobre las ventas y los suministros de armas a Portugal.

313. En virtud de la resolución 1807 (XVII), la Asamblea General hizo suyas casi todas las conclusiones y recomendaciones del Comité. Encareció, entre otras cosas, al Gobierno de Portugal que pusiera en práctica las recomendaciones contenidas en el informe del Comité Especial para los Territorios bajo Administración Portuguesa, sobre todo en los párrafos 442 a 445, adoptando las medidas siguientes: a) reconocer inmediatamente el derecho de los pueblos de los territorios bajo su administración a la libre determinación y a la independencia; b) cesar inmediatamente todo acto de represión y retirar todas las fuerzas militares y de otra índole que emplea actualmente con ese fin; c) promulgar una amnistía política incondicional y crear las condiciones necesarias para el libre funcionamiento de los partidos políticos;

d) entablar negociaciones, a base del reconocimiento del derecho a la libre determinación, con los representantes calificados de los partidos políticos existentes en el interior o en el exterior de los territorios, con miras al traspaso de los poderes a instituciones políticas libremente elegidas y representativas de la población, conforme a la resolución 1514 (XV); e) conceder inmediatamente después la independencia a todos los territorios bajo su administración, conforme a las aspiraciones del pueblo. La Asamblea General pidió encarecidamente a todos los Estados que se abstuvieran de ofrecer al Gobierno de Portugal cualquier asistencia, y pidió al Consejo de Seguridad que adoptase, en caso de que el Gobierno de Portugal se negara a aplicar dicha resolución y las anteriores resoluciones de la Asamblea General sobre esta cuestión, las medidas apropiadas para lograr que Portugal cumpliera con sus obligaciones de Estado Miembro. También pidió al nuevo Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales que concediera gran prioridad al examen de la situación en los territorios <sup>189/</sup>. En el mismo período de sesiones, la Asamblea General instituyó, por la resolución 1808 (XVII), un programa especial de capacitación para la población autóctona de esos territorios, e invitó a los Estados Miembros a que, directamente o por intermedio de organizaciones benéficas, ofreciesen a los estudiantes de los territorios bajo administración portuguesa becas que cubriesen todos los gastos necesarios, tanto para terminar la enseñanza secundaria como para seguir estudios superiores de distintas clases.

314. Como el Gobierno de Portugal seguía negándose a cooperar con las Naciones Unidas sobre el particular y seguía llevando a cabo una política de represión contra la población autóctona, el Comité de los Veinticuatro adoptó desde 1963 varias resoluciones en las que reafirmaba el derecho inalienable de los pueblos de los territorios bajo dominación portuguesa a la libertad y a la independencia, de conformidad con la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, y reconocía la legitimidad de su lucha por lograr ese derecho; el Comité también condenó la actitud de Portugal por ser contraria a sus obligaciones contraídas en virtud de la Carta, y señaló a

---

<sup>189/</sup> El Comité Especial para los Territorios bajo Administración Portuguesa, creado por la resolución 1699 (XVI), fue disuelto en virtud de la resolución 1809 (XVII).

la atención del Consejo de Seguridad la necesidad de adoptar medidas apropiadas, incluso sanciones, para lograr que Portugal acatase las resoluciones pertinentes de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad. El Comité reiteró repetidamente que, para lograr una solución pacífica del problema, era preciso que Portugal pusiese en práctica las medidas enunciadas en dichas resoluciones, en especial las contenidas en la resolución del Consejo de Seguridad del 31 de julio de 1963. También exhortó a todos los Estados, y en particular a los aliados de Portugal dentro del marco de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, a que se abstuvieran de suministrar a Portugal ayuda militar o de otra índole en tanto que el Gobierno no renunciase a su política de dominación colonial, y recomendó la ruptura de relaciones diplomáticas y económicas con Portugal.

315. Por las resoluciones 1913 (XVIII), 2105 (XX), 2107 (XX) y 2184 (XXI), la Asamblea General hizo suyas las conclusiones y recomendaciones del Comité Especial, y en su resolución 2184 (XXI) condenó, como un crimen contra la humanidad, la política del Gobierno de Portugal, que violaba los derechos económicos y políticos de la población autóctona al asentar a inmigrantes extranjeros en los territorios y al exportar mano de obra africana a Sudáfrica. Además, la Asamblea General condenó las actividades de los intereses financieros que operan en los territorios, explotando los recursos humanos y materiales y constituyendo un obstáculo al progreso de los pueblos de los territorios hacia la independencia; hizo un llamamiento a todos los Estados para que prestasen a la población autóctona de los territorios el apoyo moral y material que requiera la restauración de sus derechos inalienables; pidió a todos los Estados que se opusieran a que sus nacionales que participen en intereses financieros extranjeros intervengan en actividades que constituyan un obstáculo a la libertad e independencia de la población; exhortó a los Estados Miembros a que aplicaran, individual o colectivamente, sanciones diplomáticas, económicas y comerciales contra Portugal; pidió a todos los Estados, y en particular a los aliados militares de Portugal, que cesaran toda ayuda militar a Portugal; hizo un llamamiento a todos los organismos especializados, y en particular al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, para que se abstuviesen de prestar a Portugal cualquier ayuda, y pidió al Secretario General que iniciase consultas con el Banco con el fin de lograr que Portugal acatase las resoluciones pertinentes de la Asamblea General, y pidió al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados que aumentase su asistencia a los refugiados de los Territorios.

316. En cuanto al programa especial de capacitación, instituido en virtud de las resoluciones 1808 (XVII) y 1973 (XVIII), la Asamblea General aprobó en sus decimoctavo, vigésimo y vigésimo primer períodos de sesiones varias resoluciones encaminadas a mejorar el funcionamiento del programa. Por las resoluciones 2108 (XX) y 2237 (XXI), la Asamblea General, entre otras cosas, invitó a los Estados que habían ofrecido becas a que considerasen en primer lugar la posibilidad de ofrecer becas de enseñanza secundaria y de formación profesional y técnica. También pidió a los Estados miembros que facilitasen los viajes de los estudiantes de los territorios bajo administración portuguesa que desearan aprovechar las oportunidades de estudio ofrecidas, y que informasen al Secretario General sobre todas las becas que se ofreciesen y sobre las que fueran otorgadas y utilizadas.

b) Medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad

317. En opinión de un gran número de Estados Miembros, la situación en los territorios bajo administración portuguesa constituía un serio peligro para la paz y la seguridad internacionales. Sin duda, las operaciones militares y otras medidas de represión de Portugal contra la población autóctona han dado lugar a numerosas violaciones del territorio de los países africanos limítrofes. En diversas ocasiones se reunió el Consejo de Seguridad para examinar esas cuestiones 190/.

---

190/ En abril de 1963, el Consejo se reunió para examinar las acusaciones formuladas por Senegal en el sentido de que aviones portugueses habían violado el espacio aéreo y lanzado bombas sobre una población. En virtud de la resolución 178 (1963) del 24 de abril de 1963, presentada por Ghana y Marruecos, el Consejo deploró la incursión y pidió a Portugal que tomase las medidas necesarias para impedir cualquier violación del espacio aéreo del Senegal. En abril de 1964 y en febrero de 1965, Guinea y Senegal dirigieron comunicaciones al Consejo de Seguridad informándole de que sus espacios aéreos habían sido violados por aviones portugueses y manifestando que semejantes actos hacían peligrar la paz y la seguridad internacionales. En mayo de 1965 se reunió el Consejo a petición del Senegal para examinar las acusaciones de reiteradas violaciones de su territorio por parte de las autoridades portuguesas. En la resolución 204 (1965) de 19 de mayo de 1965, aprobada por unanimidad, el Consejo de Seguridad reafirmó su resolución 178 (1963) y pidió una vez más al Gobierno de Portugal que impidiese cualquier violación de la soberanía y de la integridad territorial del Senegal. En 1966 y 1967 se dirigieron nuevamente comunicaciones al Consejo de Seguridad en relación con violaciones de la soberanía territorial de los Estados

(continúa)



318. La Asamblea General y el Comité de los Veinticuatro señalaron reiteradamente a la atención del Consejo de Seguridad el empeoramiento de la situación de los territorios, y pidieron al Consejo que adoptase las medidas necesarias para poner en práctica sus propias decisiones y las de la Asamblea General. Desde 1963, el Consejo de Seguridad ha examinado la cuestión en varias reuniones y ha aprobado una serie de resoluciones, en las que, entre otras cosas, se señalaba que la política de Portugal constituía una violación de la Carta de las Naciones Unidas y se puntualizaba que la situación de los territorios perturbaba gravemente la paz y la seguridad en Africa.

i) Medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad en 1963

319. Con el fin de examinar la cuestión, el Consejo de Seguridad se reunió el 21 de julio de 1963, a propuesta de 32 Estados africanos, quienes alegaban que la situación en los territorios constituía un grave peligro para la paz y la seguridad internacionales. Por 8 votos contra ninguno y 3 abstenciones <sup>191/</sup>, el Consejo

---

190/ (continuación) límites cometidas por Portugal. El 14 de octubre de 1966, el Consejo de Seguridad aprobó la resolución 226 (1966) en la que, entre otras cosas, instaba al Gobierno de Portugal a que no permitiera que mercenarios extranjeros utilizasen a Angola como base de operaciones para inmiscuirse en los asuntos internos de la República Democrática del Congo, y exhortó a todos los Estados a que se abstuviesen de intervenir en los asuntos internos de ese país. El 10 de julio de 1967, el Consejo de Seguridad aprobó por unanimidad la resolución 239 (1967), en la que, entre otras cosas, reafirmaba su resolución 226 (1966) e instaba a los gobiernos a que procurasen que su territorio y otros territorios bajo su control, así como sus nacionales, no fuesen empleados para la planificación de la subversión, y el reclutamiento, adiestramiento y tránsito de mercenarios destinados a derrocar el Gobierno de la República Democrática del Congo. El 15 de noviembre de 1967, el Consejo de Seguridad aprobó sin ninguna objeción la resolución 241 (1967) en la que, entre otras cosas, condenaba a Portugal, sobre todo por no impedir, en violación de las resoluciones 226 (1966) y 239 (1967) del Consejo de Seguridad, que mercenarios extranjeros utilizasen el territorio de Angola como base de ataques armados contra la República Democrática del Congo. También exhortó a Portugal a que cesara inmediatamente la ayuda en cualquier forma a los mercenarios.

191/ Estados Unidos de América, Francia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

aprobó la resolución 180 (1963), basada en una propuesta presentada por Ghana, Marruecos y Filipinas y enmendada por Venezuela. En virtud de esa resolución, el Consejo de Seguridad afirmó que la política de Portugal de sostener que los territorios bajo su administración son territorios "de ultramar" era contraria a la Carta, deploró la actitud del Gobierno de Portugal por su negativa a dar cumplimiento a las resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad y puntualizó que la situación de los territorios perturbaba la paz y la seguridad en Africa. Pidió a Portugal que pusiera en práctica urgentemente las siguientes medidas:

a) reconocer inmediatamente el derecho de los pueblos de los territorios bajo su administración a la libre determinación y a la independencia; b) cesar inmediatamente todo acto de represión y retirar todas las fuerzas militares y de otra índole que emplea actualmente con ese fin; c) promulgar una amnistía política incondicional y crear las condiciones necesarias para el libre funcionamiento de los partidos políticos; d) entablar negociaciones, a base del reconocimiento del derecho a la libre determinación, con los representantes calificados de los partidos políticos existentes en el interior o en el exterior de los territorios, con miras al traspaso de los poderes a instituciones políticas libremente elegidas y representativas de la población, conforme a la resolución 1514 (XV); e) conceder inmediatamente después la independencia a todos los territorios bajo su administración, conforme a las aspiraciones del pueblo. El Consejo también pidió que todos los Estados se abstuviesen de ofrecer al Gobierno de Portugal cualquier asistencia que lo pusiera en condiciones de continuar la represión que ejerce sobre los pueblos de los territorios por él administrados, y tomaran todas las medidas necesarias para evitar la venta y el suministro de armas y equipo militar, para ese fin, al Gobierno de Portugal. También pidió al Secretario General que asegurase la aplicación de la resolución.

320. En su informe de fecha 31 de octubre de 1963, el Secretario General puso en conocimiento del Consejo de Seguridad que, en virtud del mandato que le había sido conferido, su representante personal y los representantes del Gobierno portugués habían establecido contactos directos en Lisboa. También se celebraron negociaciones en Nueva York entre los representantes de Estados africanos y de Portugal, con los auspicios y en presencia del Secretario General, sobre la cuestión de la libre determinación. Posteriormente, los Estados africanos publicaron una declaración

en la que se daba a conocer la suspensión de las negociaciones, teniendo en cuenta que Portugal seguía negándose a modificar los principios básicos que rigen su política colonial <sup>192/</sup>.

321. El Secretario General transmitió al Consejo las comunicaciones recibidas de los Estados Miembros, en las que se indicaban las medidas que habían adoptado para dar cumplimiento a la última resolución del Consejo de Seguridad. A petición de 29 Estados africanos, el 6 de diciembre de 1963 se reunió el Consejo para examinar el informe del Secretario General. Por 10 votos contra ninguno y una abstención <sup>193/</sup>, el Consejo aprobó la resolución 183 (1963). En esa resolución el Consejo exhortó a todos los Estados a que acatasen las disposiciones de la resolución 180 (1963); deploró que el Gobierno de Portugal no acatará la resolución 180 (1963) y reafirmó la interpretación de la libre determinación que figura en la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, según la cual todos los pueblos tienen derecho a la libre determinación; en virtud de este derecho, determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural.

ii) Medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad en 1965

322. En noviembre de 1965 el Consejo de Seguridad examinó nuevamente la cuestión a petición de 32 Estados africanos que alegaban que Portugal estaba intensificando sus medidas de represión contra los pueblos de los territorios bajo su administración, en violación de las resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad. Señalaron asimismo que la obstinación de Portugal de perpetuar su dominación sobre esos territorios constituía una grave amenaza para la paz y la seguridad internacionales, y pidieron al Consejo de Seguridad que adoptara las medidas apropiadas previstas en la Carta con el fin de dar cumplimiento a su resolución sobre la materia. Por 7 votos contra ninguno y 4 abstenciones <sup>194/</sup>, el Consejo aprobó el 23 de noviembre de 1965 la resolución 218 (1965), que había sido presentada

---

<sup>192/</sup> Memoria Anual del Secretario General sobre la labor de la Organización, 16 de junio de 1963 - 15 de junio de 1964.

<sup>193/</sup> Francia.

<sup>194/</sup> Estados Unidos de América, Francia, Países Bajos, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

por siete Estados afroasiáticos y enmendada por Uruguay <sup>195/</sup>. En esa resolución, el Consejo, entre otras cosas, afirmó que la situación resultante de la política portuguesa, en lo que respecta tanto a la población africana de sus colonias como a los Estados limítrofes, perturbaba seriamente la paz y la seguridad internacionales, y reafirmó la interpretación del principio de la libre determinación que figura en la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General y en la resolución 183 (1963) del Consejo de Seguridad. Invitó a Portugal a dar efectividad inmediata al principio de libre determinación en los territorios bajo su administración. Pidió nuevamente que todos los Estados se abstuvieran inmediatamente de ofrecer al Gobierno de Portugal cualquier asistencia que lo pusiera en condiciones de continuar la represión que ejerce sobre los pueblos de los territorios por él administrados, y tomaran todas las medidas necesarias para evitar la venta y el suministro de armas y equipo militar al Gobierno portugués para ese efecto, incluso la venta y entrega de equipos y materiales para fabricar y mantener armas y municiones para ser usadas en los territorios bajo administración portuguesa.

c) Medidas adoptadas por la Comisión Económica para Africa

323. En la resolución 24 (III) <sup>196/</sup> aprobada el 16 de febrero de 1961 en su tercer período de sesiones, la Comisión Económica para Africa tomó nota de la resolución 1466 (XIV) de la Asamblea General, de 12 de diciembre de 1959, en la que se invitaba especialmente a todos los Estados Miembros que administran territorios no autónomos en Africa a proponer la participación de esos territorios en los trabajos de la Comisión Económica para Africa. Pidió al Secretario Ejecutivo que transmitiera urgentemente a los países encargados de las relaciones internacionales de los territorios no autónomos el deseo de la Comisión de que esos países estén representados por africanos en el próximo período de sesiones de la Comisión, en calidad de miembros asociados. Como Portugal se negó a aplicar la resolución de la Asamblea General y de la Comisión relativa a la representación de los territorios

---

<sup>195/</sup> El párrafo 8 del proyecto de resolución, que exigía boicotear todas las importaciones y exportaciones portuguesas, obtuvo 4 votos a favor (Costa de Marfil, Jordania, Malasia, URSS), ninguno en contra y 7 abstenciones, y no fue aprobado por no haber obtenido la mayoría necesaria de votos.

<sup>196/</sup> E/CN.14/109/Rev.1.

no autónomos, la Comisión recomendó al Consejo Económico y Social, en la resolución 42 (IV) de 24 de febrero de 1962 <sup>197/</sup>, aprobada en su cuarto período de sesiones, que se privara a Portugal de su condición de miembro de la Comisión Económica para África.

324. Dado que el Consejo Económico y Social no hizo suya la recomendación en su 34º período de sesiones, la Comisión Económica para África aprobó en su 5º período de sesiones la resolución 68 (V) <sup>198/</sup>, de 23 de febrero de 1963, en la que recomendaba al Consejo que reconsiderara su decisión sobre la recomendación de la Comisión respecto de la calidad de Portugal como miembro de la CEPA. Por la resolución 974 (XXXVI) D III <sup>199/</sup>, el Consejo Económico y Social tomó nota de que los miembros no africanos de la Comisión, excepción hecha de Portugal, habían aceptado la condición de miembro asociado, y decidió expulsar a Portugal como miembro de la Comisión Económica para África.

325. Por la resolución 84 (V) de 1º de marzo de 1963, la Comisión Económica para África invitó a todos los Estados africanos miembros de la Comisión a que tuvieran en cuenta la política del Gobierno de Portugal al conceder a los representantes de ese país visados o permisos de entrada para poder participar en las conferencias y reuniones de la Comisión o de los organismos especializados que pudieran organizarse en cualquier Estado africano miembro de la Comisión.

#### 4. Medidas adoptadas por la Organización Internacional del Trabajo

##### a) Creación de un Comité Especial del Trabajo Forzoso

326. El 19 de marzo de 1951 el Consejo Económico y Social, en virtud de la resolución 350 (XII), decidió invitar a la Organización Internacional del Trabajo a colaborar con el Consejo a fin de crear cuanto antes un Comité especial del trabajo forzoso, compuesto a lo sumo de cinco miembros independientes, calificados por su competencia y su imparcialidad, que serían nombrados de común acuerdo por el Secretario General de las Naciones Unidas y el Director General de la Oficina

---

<sup>197/</sup> E/CN.14/168.

<sup>198/</sup> E/CN.14/229/Rev.1.

<sup>199/</sup> E/3816.

Internacional del Trabajo, y cuyas atribuciones serían las siguientes: estudiar la naturaleza y el alcance de los problemas planteados por la existencia en el mundo de sistemas de trabajo forzoso "correcional" que se apliquen como medio de coerción política o de castigo a personas que sustentan o expresan ciertas opiniones políticas y cuyo desarrollo sea tal que constituyan un elemento importante en la economía de un país dado, examinando los textos legislativos y reglamentarios, así como su aplicación, en relación con los principios recordados antes y, si el Comité lo estima conveniente, tomando en consideración nuevos testimonios. El 27 de junio de 1951, el Secretario General de las Naciones Unidas y el Director adjunto de la OIT establecieron el Comité Especial del Trabajo Forzoso.

327. El Comité examinó las alegaciones sobre la existencia de trabajos forzosos en los territorios bajo dominación portuguesa, hechas por el representante de la República Socialista Soviética de Bielorrusia y la Federación Sindical Mundial en el curso de los debates del 12º período de sesiones del Consejo Económico y Social. El Comité llegó a las siguientes conclusiones:

- "a) el trabajo forzoso u obligatorio está prohibido, en principio, por la legislación portuguesa, pero existen ciertas restricciones y excepciones en esta legislación que permiten la exigencia de trabajo forzoso u obligatorio;
- b) las disposiciones que protegen a los trabajadores indígenas contra métodos injustos de reclutamiento no excluyen, sin embargo, cierto grado de coacción y es posible que, en la práctica, los funcionarios responsables ejerzan alguna presión sobre los trabajadores, para inducirles a que acepten contratos de empleo ofrecidos por agentes reclutadores;
- c) con relación al reclutamiento en Mozambique de trabajadores indígenas para las minas de la Unión Sudafricana, podrían crearse condiciones de trabajo forzoso, por la aplicación combinada de presión en el momento de reclutamiento y de la legislación sudafricana que rige las violaciones de contratos de trabajo;
- d) la labor de los trabajadores de Santo Tomé tiene considerable importancia económica para el territorio y la situación de éstos parece ser análoga a la de trabajadores bajo un sistema de trabajo forzoso con fines económicos." 200/

b) La Comisión de Trabajo Forzoso de la OIT

328. De conformidad con la decisión adoptada por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo en su 129ª reunión, celebrada en junio de 1955, el Director General creó la Comisión de Trabajo Forzoso con miras a analizar el material recibido por la Organización en lo que respecta a la utilización y la extensión del trabajo forzoso en el mundo. La Comisión estudió la situación de los territorios bajo dominación portuguesa. En su primer informe, publicado en 1956, la Comisión indicó que "no tenía motivos para creer que las conclusiones del Comité Especial, mencionadas anteriormente, hubieran dejado de ser válidas" <sup>201/</sup>. En su segundo informe, publicado en 1957, la Comisión formuló una serie de observaciones relativas a la obligación de trabajar prevista en la legislación, el empleo del trabajo forzoso para fines públicos, las medidas que se podían adoptar con objeto de obligar a los indígenas a reanudar el trabajo para el que habían aceptado voluntariamente contratos, el reclutamiento de trabajadores indígenas, el reclutamiento en el territorio de Mozambique para las minas de Sudáfrica y las condiciones de trabajo en Santo Tomé <sup>202/</sup>.

c) Creación de una Comisión para examinar una queja contra el Gobierno de Portugal presentada por Ghana

329. En su 149ª reunión, el Consejo de Administración de la OIT <sup>203/</sup> decidió, en cumplimiento del artículo 26 de la Constitución de la OIT, nombrar una Comisión <sup>204/</sup> para examinar una queja presentada por el Gobierno de Ghana relativa al hecho de que el Gobierno de Portugal no cumplía el Convenio sobre la Abolición del Trabajo Forzoso, 1957 (Nº 105) en Mozambique, Angola y Guinea. La Comisión celebró tres reuniones y en su informe llegó, entre otras, a las siguientes conclusiones:

---

<sup>201/</sup> Informe de la Comisión de Trabajo Forzoso de la OIT, Ginebra 1956, Informe 6-39ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo.

<sup>202/</sup> Informe de la Comisión de Trabajo Forzoso de la OIT, Ginebra 1957, Informe 4-40ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo.

<sup>203/</sup> Informe de la Comisión, Oficina Internacional del Trabajo, vol. XLV, Nº 2, Suplemento II, abril de 1962.

<sup>204/</sup> La composición de la Comisión era la siguiente: Presidente, Sr. Paul Ruegger (Suiza); miembros: Sr. Enrique Armand-Ugon (Uruguay) y Sr. Isaac Forster (Senegal).

"La Comisión tomó nota de que, desde el 23 de noviembre de 1960, se habían introducido modificaciones sustanciales en la legislación y la práctica portuguesa, concernientes a la aplicación del Convenio. Parecía que algunas de ellas perseguían directamente el objetivo de poner en ejecución las disposiciones del Convenio, mientras que otras, aunque de alcance más general, tenían una importante incidencia en la aplicación del mismo.

La Comisión reconoce todo el valor de las disposiciones referidas que han sido adoptadas con el fin de ajustar la legislación a la situación emergente de la ratificación del Convenio. La Comisión advierte, sin embargo, que en la legislación subsisten todavía ciertas anomalías que, en el caso de que trascendieran a la práctica, serían incompatibles con las obligaciones que se desprenden del Convenio.

La Comisión formula también las siguientes recomendaciones con referencia a la revisión en curso de la legislación del trabajo aplicable a los territorios que se mencionan en la queja:

- a) abrogación formal de la facultad de imponer el cultivo obligatorio, que todavía prevé el apartado e) del párrafo 3 del artículo 296 del Código de Trabajo Indígena de 1928, así como de toda la reglamentación provincial correspondiente;
- b) abrogación expresa de las disposiciones -que se afirma han sido ya implícitamente abolidas- según las cuales las medidas tomadas para obligar a los trabajadores a cumplir los contratos que habían celebrado libremente no estaban consideradas como imposición de trabajo forzoso, a saber, los artículos 300 y 329 (párrafo único) del Código de Trabajo Indígena de 1928 y toda la reglamentación provincial correspondiente;
- c) en el caso de que se mantuvieran las disposiciones concernientes a la imposición del trabajo obligatorio para obras de interés local (tales como las que figuran actualmente en los apartados a) a d) del párrafo 3 del artículo 296 del Código de Trabajo Indígena de 1928), que ellas estén acompañadas de las garantías necesarias para asegurar la estricta limitación de esas obligaciones a pequeñas tareas locales, con exclusión de trabajos públicos de alcance más general.

La Comisión advirtió que, en ciertos casos, los reglamentos relativos a cuestiones laborales o que tuvieran relación con ellas, tales como la obligación de trabajar, los procedimientos del reclutamiento (incluyendo el reclutamiento para los servicios públicos y con destino a la Compañía de Diamantes de Angola), y ciertos cultivos, habían tomado la forma de circulares confidenciales no publicadas que, en ocasiones, parecían difíciles de conciliar con las disposiciones constitucionales y con la legislación aplicable. La Comisión recomienda que todos los reglamentos relativos al reclutamiento de la mano de obra, o que recaigan sobre la aplicación del Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, se den a la publicidad y resulten accesibles a todas las partes interesadas.



La Comisión tuvo también ocasión de examinar la aplicación de las leyes sobre la represión de la vagancia en los territorios a que se refiere la queja. Según las informaciones de que dispuso la Comisión y de ciertos testimonios que le fueron presentados, parece que no siempre puede establecerse una distinción precisa en esos territorios entre la falta de actividad como tal y la vagancia caracterizada por la ausencia de trabajo, de recursos y de domicilio fijo. La Comisión llama la atención del Gobierno sobre otra disposición de la Recomendación relativa a los medios indirectos de compulsión para el trabajo, 1930, mediante la cual la Conferencia subrayó que convenía evitar toda extensión abusiva de la noción generalmente aceptada del término "vagabundeo" (parte II, apartado c)).

Por consiguiente, la Comisión recomienda que el Gobierno conceda prioridad especial a la necesidad de lograr que el servicio de inspección del trabajo recientemente creado sea una realidad efectiva.

Si bien es cierto que un mejor servicio de inspección constituye la clave de la aplicación satisfactoria de la política preconizada por el Gobierno, los problemas y dificultades económicas y sociales fundamentales, de las cuales constituye un reflejo el recurso al trabajo forzoso, son de todos modos motivo de constante preocupación.

... La política para abolir el trabajo forzoso, ya comenzada por el Gobierno y para cuya aplicación se han registrado progresos considerables, no puede realizarse plenamente en un medio social y cultural atrasado, donde la libertad y la coacción pueden significar para muchas personas nociones igualmente irreales y donde resulta difícil para todo gobierno conocer algo de lo que ocurre en la mente de todos los que se hallan directamente interesados en las medidas gubernamentales.

En algunos lugares, ... la Comisión adquirió la convicción de que ... el conjunto de los trabajadores se encuentra en un estado de desarrollo tan atrasado, la libertad y las posibilidades económicas se encuentran en un mundo que se halla tan fuera de su alcance, que prácticamente pierde todo significado el querer determinar si el trabajo que se obtiene de ellos es o no trabajo forzoso. A este problema no puede aportarse ninguna solución sencilla o inmediata; tal problema implica toda la cuestión del nivel de desarrollo social y cultural de la población y, más aún, representa un aspecto esencial del fondo del problema que la Comisión debía examinar y constituyó una de las mayores dificultades con que se tropezó para llegar, en ciertos casos, a conclusiones valederas. Impresionaron a la Comisión los numerosos signos de desarrollo económico y social constructivo, tanto en Angola como en Mozambique. Pero es necesario intensificar considerablemente las medidas del progreso económico y social para eliminar este elemento del problema de la abolición efectiva del trabajo forzoso."

## SECCION B

### EVOLUCION RECIENTE: 1967-1968

#### 1. Introducción

330. En 1967 y 1968, la cuestión de los territorios bajo administración portuguesa fue examinada por el Comité de los 24, el Seminario Internacional sobre Apartheid, Discriminación Racial y Colonialismo en el Africa meridional, celebrado en Kitwe, Zambia, del 25 de julio al 4 de agosto de 1967, la Asamblea General en su vigésimo segundo período de sesiones, la Conferencia Internacional de Derechos Humanos, el Consejo Económico y Social y sus órganos auxiliares.

#### 2. Medidas cuya adopción recomendó el Seminario Internacional sobre Apartheid, Discriminación Racial y Colonialismo en el Africa meridional, celebrado en Kitwe, Zambia, del 25 de julio al 4 de agosto de 1967

331. El Seminario examinó la cuestión de los territorios bajo administración portuguesa y recomendó a la Asamblea General, entre otras cosas, que reconociera la legitimidad de la lucha de los pueblos de estos territorios, impusiera sanciones obligatorias eficaces a Portugal e intensificara la campaña para la liberación de los presos políticos. Deploró que Portugal continuara recibiendo ayuda militar de sus aliados en la Organización del Tratado del Atlántico Norte y que varias Potencias occidentales realizaran inversiones cada vez mayores en los Territorios. Recomendó que se ampliaran las atribuciones del Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para Sudáfrica a fin de incluir a las víctimas de la discriminación racial y el colonialismo en Angola, Mozambique y otras colonias de Africa.

#### 3. Medidas adoptadas por la Asamblea General y sus órganos auxiliares

332. La Asamblea General examinó en su vigésimo segundo período de sesiones la cuestión de los territorios bajo administración portuguesa, hizo suyas la resolución, conclusiones y recomendaciones contenidas en el informe del Comité de los 24 <sup>205/</sup>, y aprobó por 82 votos contra 2 y 21 abstenciones la resolución 2270 (XXII). En dicha resolución,

---

<sup>205/</sup> A/6700/Add.3.

la Asamblea General condenó la persistencia del Gobierno de Portugal en no querer aplicar las resoluciones aprobadas por la Asamblea General, las acciones de ese Gobierno para perpetuar su opresivo dominio extranjero, así como la violación de los derechos económicos y políticos de la población autóctona mediante el asentamiento de inmigrantes extranjeros en los Territorios y la exportación forzosa de trabajadores africanos a Sudáfrica. La Asamblea General hizo un llamamiento al Gobierno de Portugal para que pusiera fin a estas prácticas. La guerra colonial que realiza Portugal contra la pacífica población de los Territorios fue de nuevo calificada de crimen de lesa humanidad y de grave amenaza a la paz y seguridad internacionales. La Asamblea General también condenó enérgicamente las actividades de los intereses financieros que operan en los territorios bajo dominación portuguesa, explotan los recursos humanos y materiales de los Territorios y entorpecen el progreso de su población hacia la libertad y la independencia. La Asamblea General tomó además las medidas siguientes: señaló a la atención urgente del Consejo de Seguridad el empeoramiento continuo de la situación en los Territorios, así como las consecuencias de esas violaciones por Portugal de la integridad territorial y la soberanía de Estados africanos independientes vecinos que lindan con sus colonias y recomendó al Consejo de Seguridad que diera obligatoriedad a las disposiciones de sus resoluciones sobre esta cuestión, en particular su resolución 218 (1965) y las resoluciones 2107 (XX) y 2184 (XXI) de la Asamblea General. Asimismo, la Asamblea General pidió de nuevo a todos los Estados, y en particular a los aliados militares de Portugal en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que se abstuvieran inmediatamente de prestar al Gobierno de Portugal cualquier ayuda que pudiera facilitar la continuación de su represión contra la población africana y que impidiesen la venta o suministro de armas y equipo militar a Portugal; hizo un llamamiento a todos los organismos especializados, en particular al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y al Fondo Monetario Internacional, para que se abstuvieran de prestar a Portugal toda ayuda financiera, económica o técnica mientras el Gobierno de Portugal no aplicase la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General. Pidió al Secretario General que, en consulta con el Comité Especial, promoviera por conducto de los diversos órganos y organismos de las Naciones Unidas la difusión general y continua de la labor de las Naciones Unidas sobre esta cuestión y que preparase con ese fin periódicamente publicaciones especiales para su amplia difusión en varios idiomas.

333. La Asamblea General hizo referencia a las cuestiones de los territorios bajo administración portuguesa en otras resoluciones aprobadas durante su vigésimo segundo período de sesiones.

334. En la resolución 2288 (XXII), la Asamblea General trató el tema titulado: "Actividades de los intereses extranjeros, económicos y de otro tipo, que constituyen un obstáculo para la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales en Rhodesia del Sur, el Africa Sudoccidental y los territorios bajo dominación portuguesa, así como en todos los demás territorios bajo dominación colonial, y esfuerzos para eliminar el colonialismo, el apartheid y la discriminación racial en Africa meridional". Entre otras cosas, la Asamblea General condenó enérgicamente la explotación de los territorios y pueblos coloniales y los métodos practicados en los territorios bajo dominación colonial por los intereses extranjeros, financieros, económicos y de otro tipo, que estén encaminados a perpetuar los regímenes coloniales contrariamente a los principios enunciados en la resolución 1514 (XV) y deploró las políticas de las Potencias coloniales que permiten la explotación de los recursos naturales de los territorios bajo su administración en forma contraria a los intereses de la población autóctona y que promueven o toleran regímenes de trabajo y otras prácticas injustos y discriminatorios 206/.

335. En la resolución 2311 (XXII), la Asamblea General examinó el tema de la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales por los organismos especializados y las instituciones internacionales relacionadas con las Naciones Unidas. Recomendó a los organismos especializados e instituciones internacionales interesados que tomaran medidas urgentes y eficaces para ayudar a los pueblos que luchan por liberarse del dominio colonial y, en particular, que, dentro del ámbito de sus actividades respectivas, brindasen toda la ayuda posible a los pueblos oprimidos de Rhodesia del Sur y de los territorios bajo dominación portuguesa y que, en cooperación con la Organización de la Unidad Africana y, por su intermedio, con los movimientos de liberación nacional, elaborasen programas concretos con este fin. Recomendó asimismo a dichos organismos que no prestaran asistencia alguna a Sudáfrica y a Portugal hasta que hubieran renunciado a su política de discriminación racial y dominación colonial 207/.

---

206/ Véase también infra párr. 339.

207/ Véase infra párrs. 347 a 352.

336. En su resolución 2349 (XXII), la Asamblea General examinó el problema de la consolidación e integración de los programas especiales de enseñanza y capacitación para el Africa Sudoccidental, del programa especial de capacitación para los territorios bajo administración portuguesa y del programa de enseñanza y capacitación para sudafricanos. Decidió integrar los programas especiales de enseñanza y capacitación para el Africa Sudoccidental, el programa especial de capacitación para los territorios bajo administración portuguesa y el programa de enseñanza y capacitación para sudafricanos.

337. El 26 de junio de 1968, el Comité de los 24 aprobó una resolución <sup>208/</sup> en la que, entre otras cosas: a) condenó toda forma de ayuda militar que cualquier Estado prestara directa o indirectamente al Gobierno de Portugal; b) condenó la política de Portugal de utilizar los territorios bajo su dominación para proseguir su comercio y otras formas de ayuda al régimen de minoría, racista e ilegal, de Rhodesia del Sur, con desafío a las resoluciones pertinentes de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad; c) condenó también la política de Portugal de utilizar los territorios bajo su dominación para efectuar violaciones de la integridad territorial y la soberanía de Estados africanos independientes vecinos; d) recomendó al Consejo de Seguridad que considerase urgentemente la adopción de las medidas necesarias para dar obligatoriedad a las disposiciones de sus resoluciones sobre esta cuestión, en particular su resolución 218 (1965) de 23 de noviembre de 1965, así como a las de las resoluciones 2107 (XX) de 21 de diciembre de 1965, 2184 (XXI) de 12 de diciembre de 1966 y 2270 (XXII) de 17 de noviembre de 1967 de la Asamblea General; e) reiteró su llamamiento a todos los Estados para que prestaran a la población de los territorios bajo dominación portuguesa el apoyo moral y material necesarios para la restitución de sus derechos inalienables; f) reiteró su llamamiento a todos los organismos especializados, en particular al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y al Fondo Monetario Internacional, para que se abstuvieran de prestar a Portugal toda ayuda financiera, económica o técnica mientras el Gobierno de Portugal no aplicase la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General; g) decidió además seguir estudiando la situación existente en los territorios y examinar el grado en que los Estados cumplen las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas.

338. El 23 de septiembre de 1968, el Comité de los 24 aprobó otra resolución <sup>209/</sup> en la que condenaba al Gobierno de Portugal por el empleo de napalm y fósforo blanco y

<sup>208/</sup> A/AC.109/292.

<sup>209/</sup> A/AC.109/299.

por sus preparativos para utilizar desfoliantes químicos y gas venenoso en su guerra colonial contra el pueblo de Guinea (Bissau), pedía a su Relator que tomara todas las medidas apropiadas para estudiar e informar sobre el uso de armas de gran poder destructivo y todos los demás aspectos de la guerra colonial, particularmente en Guinea (Bissau) e instaba a todos los Estados a no escatimar esfuerzos por evitar el posible uso de armas de gran poder destructivo en esta guerra inhumana y para lograr la cesación de ésta.

339. De conformidad con las disposiciones de la resolución 2288 (XXII) de la Asamblea General, de 7 de diciembre de 1967, el Comité de los 24 examinó la cuestión de las actividades de los intereses extranjeros que constituyen un obstáculo para la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales <sup>210/</sup>. Tomando como base el informe presentado por su Subcomité I, el Comité Especial aprobó las conclusiones siguientes:

"Los monopolios extranjeros han logrado aumentar sus utilidades en los extensos territorios africanos de Rhodesia del Sur, Namibia, Angola y Mozambique. Hasta se ha falseado la aplicación de las sanciones económicas proclamadas contra el régimen racista de Rhodesia del Sur. El estudio ininterrumpido de las condiciones que imperan en los territorios coloniales indica que existe una gran comunidad de intereses entre los gobiernos coloniales y los grandes monopolios internacionales. Las normas e instituciones políticas, económicas y sociales creadas por los regímenes coloniales en los territorios tienen por objeto conseguir nuevas concesiones y privilegios para los monopolios y utilizar a los habitantes autóctonos como fuente de mano de obra barata. Las poblaciones autóctonas de los territorios continúan dependiendo, para su magro pasar, de la merced de sus opresores extranjeros, y carecen de derechos laborales, sociales y de protección médica. A su vez, los monopolios proporcionan a los regímenes coloniales fondos y otros tipos de asistencia, incluida la ayuda militar necesaria para aplastar a los movimientos nacionales de liberación.

El Comité Especial concluye, con profundo pesar, que las Potencias coloniales no han aplicado, ni siquiera en forma preliminar, la resolución 2288 (XXII) de la Asamblea General. Al hacer caso omiso de esa resolución, han aumentado los obstáculos que impiden la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales."

El Comité Especial recomendó a la Asamblea General que:

"Decida que continúe el examen de esta cuestión con objeto de determinar nuevas maneras y medios de refrenar las actividades de los intereses extranjeros, económicos y de otro tipo, que impiden la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales en los territorios que aún son dependientes, a fin de ponerles término.

Pida al Comité Especial que formule recomendaciones apropiadas al respecto y que las presente a la Asamblea General en su próximo período de sesiones." 211/

340. El 1º de abril de 1968, el Comité de los 24 decidió asimismo examinar la cuestión de las actividades militares y disposiciones de carácter militar adoptadas por las Potencias coloniales en los territorios bajo su administración que puedan constituir un obstáculo a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales 212/, de conformidad con las disposiciones de la resolución 2326 (XXII) de la Asamblea General, de 16 de diciembre de 1967.

341. El Comité señaló que, en Namibia, Rhodesia del Sur y los territorios bajo dominación portuguesa, los regímenes coloniales estaban empeñados en actividades militares cada vez más intensas encaminadas a suprimir por la fuerza las aspiraciones legítimas de la población a la libertad y a la independencia. En Namibia, el Gobierno de Sudáfrica continuaba desafiando a la autoridad de las Naciones Unidas e intensificaba sus preparativos militares con objeto de mantener su presencia ilegal en el territorio. En los territorios bajo dominación portuguesa, las autoridades de dicho país estaban llevando a cabo una guerra de represión colonial a escala cada vez mayor contra los movimientos de liberación en el intento de negar a los pueblos de esos territorios su libertad impidiéndoles de esa forma el logro de los objetivos de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General. En Rhodesia del Sur, el régimen ilegal de la minoría racista intensificaba asimismo sus actividades militares contra los nacionalistas africanos y se informaba que había logrado obtener suministros de armamentos y equipo militar a pesar del embargo impuesto por el Consejo de Seguridad en noviembre de 1965. El Comité señaló además que la información de que se disponía mostraba que Sudáfrica, Portugal y Rhodesia del Sur habían formado una entente militar. El Comité consideró que los Estados que continuaban suministrando armamentos y equipo militar a los miembros de la entente asumían una grave responsabilidad por las consecuencias de su falta de atención a los repetidos llamamientos de las Naciones Unidas.

342. El Comité aprobó las siguientes recomendaciones:

- a) afirmó que, en general, "las actividades y disposiciones militares de las Potencias coloniales en los territorios bajo su administración constituyen un serio obstáculo para la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales";

---

211/ A/7320, párrs. 18 y 19.

212/ A/7200 (parte II), cap. IV.

- b) condenó enérgicamente "como crimen de lesa humanidad, y como grave amenaza a la paz y seguridad internacionales, el inexcusable uso de la fuerza militar por las Potencias coloniales para sofocar las aspiraciones legítimas de los pueblos coloniales a la libre determinación y la independencia"; y, en particular, condenó en forma vehemente "a los Gobiernos de Sudáfrica y Portugal y al régimen minoritario racista ilegal de Rhodesia del Sur por la persistente intensificación de su concertada agresión militar contra los movimientos de liberación y los pueblos de los territorios sometidos a su dominación";
- c) condenó además "la formación en el Africa meridional de una entente militar entre los Gobiernos de Sudáfrica y Portugal y el régimen minoritario racista ilegal de Rhodesia del Sur, encaminada a sofocar por la fuerza armada el derecho inalienable de la población oprimida de la zona a la libre determinación y la independencia"; e hizo un llamamiento "a todos los Estados para que retiren todo su apoyo y asistencia, incluido el suministro de armamentos y equipo militar, a esa entente, cuya existencia y actividades son contrarias a los intereses de la paz y la seguridad internacionales". 212a/

4. Medidas adoptadas por el Consejo Económico y Social y la Comisión de Derechos Humanos 213/

343. En su 23º período de sesiones, la Comisión de Derechos Humanos aprobó, el 16 de marzo de 1967, la resolución 5 (XXIII) en la que celebraba en particular que en la resolución 2144 A (XXI) de la Asamblea General y en la resolución 1164 (XLI) del Consejo Económico y Social se insistiera en la urgencia de eliminar las políticas y prácticas de discriminación racial y segregación y del apartheid en todos los países, y en particular en los territorios coloniales y demás territorios dependientes, especialmente en la colonia rebelde de Rhodesia del Sur, en el Africa Sudoccidental, en Mozambique,

---

212a/ A/7200 (parte II), pág. 42.

213/ La Comisión de Derechos Humanos, en su 24º período de sesiones, y el Consejo Económico y Social, en su 44º período de sesiones, aprobaron también resoluciones relativas a la situación en toda el Africa meridional. Véanse párrs. 239 y 242.



en Angola, en Guinea (Bissau) y en la República de Sudáfrica; afirmaba que la grave situación reinante en la colonia rebelde de Rhodesia del Sur, en Mozambique, en Angola, en Guinea (Bissau), en el Africa Sudoccidental y en la República de Sudáfrica constituía una amenaza para la paz y la seguridad internacionales; y condenaba las actividades de los Estados que, por su colaboración política, comercial, económica y militar con los regímenes racistas y colonialistas de Sudáfrica y Portugal y con el régimen racista ilegal de Rhodesia del Sur, estimulaban a esos regímenes a proseguir su política racista, y pedía la cesación inmediata de dichas actividades.

344. En su resolución 2 (XXIV), la Comisión de Derechos Humanos amplió el mandato del Grupo Especial de Expertos creado en virtud de la resolución 2 (XXIII) de la Comisión, a fin de que investigara las alegaciones de torturas y malos tratos infligidos a presos y personas encarceladas o detenidas por la policía en Mozambique, Angola y en todos los demás territorios portugueses de Africa.

5. Medidas adoptadas por la Conferencia Internacional de Derechos Humanos celebrada en Teherán, Irán, del 22 de abril al 13 de mayo de 1968

345. En virtud de la resolución VIII, titulada: "La importancia de la realización universal del derecho de los pueblos a la libre determinación y de la rápida concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales para la efectiva garantía y observancia de todos los derechos humanos", la Conferencia Internacional de Derechos Humanos consideró legítima la lucha armada emprendida por los pueblos sometidos a la dominación portuguesa. Condenó el régimen colonial de Portugal por su constante negativa a cumplir la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General relativa a la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales. Expresó su apoyo a los movimientos de liberación y a los pueblos en su lucha por la libertad y la independencia. Condenó además a los gobiernos de los países, especialmente de los que son miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, por seguir suministrando a Portugal armas y municiones que se emplean para mantener sometida a la población indígena bajo dominación portuguesa y pidió a dichos Estados que interrumpiesen de inmediato su suministro de armas, y pidió con insistencia a los países africanos que no permitieran en adelante la instalación y el mantenimiento en los territorios nacionales de sus Estados de bases militares de las Potencias de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, mientras esas Potencias siguieran prestando ayuda y apoyo a Portugal o al régimen rebelde de Rhodesia en su política injusta e inhumana.

6. Medidas adoptadas por los organismos especializados

a) Medidas adoptadas por la Organización Internacional del Trabajo

346. En una comunicación de fecha 15 de noviembre de 1968, el Director General de la OIT declaró que la Organización Internacional del Trabajo, conforme a la decisión tomada por el Consejo de Administración el 19 de noviembre de 1965, seguiría haciendo todo lo que estuviera a su alcance por contribuir en su propia esfera de competencia a las medidas que respecto de Rhodesia del Sur decidiese el Consejo de Seguridad y seguiría absteniéndose de todo contacto oficial o no oficial, directo o indirecto, con el régimen ilegal de Rhodesia del Sur. Declaró además que no se aportaba ayuda ni cooperación a Sudáfrica y Rhodesia del Sur. En el caso específico de Portugal, en ningún momento se había concedido ayuda o cooperación 214/.

b) Medidas adoptadas por otros organismos especializados

347. De conformidad con la resolución 2311 (XXII) de la Asamblea General, de 14 de diciembre de 1967, relativa a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, el Comité de los 24 decidió incluir en su programa un tema titulado: "Aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales por los organismos especializados y las instituciones internacionales relacionadas con las Naciones Unidas". A este respecto, el Comité decidió invitar al Secretario General a que solicitase de las organizaciones internacionales interesadas que transmitiesen información sobre las medidas que habían adoptado o preveían adoptar en aplicación de dicha resolución. A continuación se reproducen las respuestas de algunos organismos especializados relativas a las medidas que han adoptado con respecto a los territorios bajo dominación portuguesa 215/.

---

214/ E/4603.

215/ A/7200 (parte II), págs. 13 a 32.

i) Medidas adoptadas por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación

348. La FAO ha indicado que, en aplicación de la resolución 2311 (XXII) de la Asamblea General, había adoptado siempre las medidas siguientes: a) por lo que respecta a la asistencia a los refugiados de los territorios bajo administración portuguesa, la FAO ha adoptado la política de dar toda la ayuda posible. Por ejemplo, el Director General ha aprobado la concesión de ayuda alimentaria urgente, con cargo al Programa Mundial de Alimentos, a Tanzania y Zambia para los refugiados necesitados que proceden de Mozambique; b) en cuanto a la cuestión de no prestar asistencia alguna a Portugal, la FAO no da ayuda de ningún tipo a este país con cargo a sus programas ordinarios o a ningún otro programa o fondo fiduciario.

ii) Medidas adoptadas por la Organización Mundial de la Salud

349. La Asamblea Mundial de la Salud aprobó el 18 de mayo de 1966 la resolución WHA 19.31 en virtud de la cual retiró a Portugal el derecho a participar en las deliberaciones del Comité Regional para Africa y en las actividades regionales mientras el Gobierno de ese país no diera pruebas de acatamiento de las exhortaciones que le han hecho las Naciones Unidas. Suspendió asimismo la prestación de asistencia técnica a Portugal. En su resolución WHA 21.34, aprobada el 23 de mayo de 1968, la 21ª Asamblea Mundial de la Salud resolvió que, en la aplicación de la resolución WHA 19.31, el Director General debería tener en cuenta la necesidad de no prever en los programas de la OMS ninguna asistencia para Portugal mientras ese país no renunciara a la política de dominación colonial.

iii) Medidas adoptadas por la Organización Internacional de Aviación Civil

350. El 8 de abril de 1968, en su 63º período de sesiones, el Consejo de la OACI decidió reafirmar el deseo de la OACI de prestar ayuda a los refugiados procedentes de los territorios de Sudáfrica, Portugal y Rhodesia del Sur. El Consejo señaló asimismo que la OACI no había prestado en el pasado ni presta actualmente ayuda a Portugal, Sudáfrica ni Rhodesia del Sur.

iv) Medidas adoptadas por la Organización Meteorológica Mundial

351. En su 20º período de sesiones (1968), el Comité Ejecutivo de la OMM examinó la resolución pertinente de la Asamblea General y fue informado de que la OMM no había proporcionado asistencia de ninguna clase (financiera, técnica o en forma de equipo) a Sudáfrica, Rhodesia del Sur ni Portugal. El Comité Ejecutivo rogó al Secretario General de la OMM que siguiera haciendo todo lo posible para preparar programas de

capacitación, con especial atención a la capacitación de los refugiados. Además, el Comité Ejecutivo aprobó la resolución 19 (EC-XX) en la que aprobaba las medidas ya tomadas por el Secretario General de la Organización en virtud de la resolución de las Naciones Unidas aprobada por la Asamblea General.

v) Medidas adoptadas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados

352. En su informe sobre la resolución 2311 (XXIII), de la Asamblea General, el Alto Comisionado declaró que, si bien no estaba facultado para proporcionar asistencia humanitaria dentro de los territorios de Rhodesia del Sur y de los territorios bajo administración portuguesa, había prestado asistencia a los refugiados que se encontraban fuera de los territorios bajo administración portuguesa, en la República Democrática del Congo, el Senegal, la República Unida de Tanzania y Zambia. Hasta 1967 inclusive, el Alto Comisionado había suministrado 482.000 dólares para asistencia de los refugiados angolanos, 1 millón de dólares para los refugiados de Mozambique, y 517.000 dólares para los procedentes de la Guinea portuguesa.

-----